

El Supremo decidirá si la agresión se considera delito de atentado

Luis López Sanz, fiscal del Tribunal Supremo, ha afirmado que el alto tribunal se va a pronunciar próximamente sobre si a los médicos que trabajan en la sanidad pública se les aplica a efectos penales la consideración de autoridad. De ser así, la agresión sería delito de atentado.

Gonzalo de Santiago 26/09/2007

La consideración del profesional sanitario del sistema público de salud como autoridad a efectos penales, en los términos que establece el artículo 24 del Código Penal, y calificar las agresiones como delito de atentado a funcionario público es un debate abierto en la profesión que ha trascendido al campo jurídico, donde existen fallos contradictorios.

Hasta el momento han sido seis las comunidades autónomas que han tipificado esta violencia contra el profesional sanitario público como delito de atentado: Asturias, Valencia, Cataluña, Galicia y País Vasco (**ver DM del 19-IX-2007**), a las que se ha sumado Andalucía, donde existe un acuerdo entre la Junta y la fiscalía del TSJ para actuar de esta manera. Con estas medidas las sanciones aplicadas a los agresores son mayores, por lo que el efecto disuasorio es mayor.

Luis López Sanz, fiscal del Tribunal Supremo, señaló que esta cuestión "está pendiente de una sentencia del Tribunal Supremo, que va a resolver un recurso de la Fiscalía del alto tribunal contra un fallo dictado por la Audiencia Provincial de Gerona". Esta resolución va a establecer doctrina, por lo que será aplicada por el resto de jueces.

En la I Jornada sobre Agresiones al Personal Sanitario, que ha organizado el Colegio de Médicos de Madrid, López Sanz expuso que el recurso de la Fiscalía parte de la consideración de que desde el Derecho Penal no sólo puede ser funcionario quien estatutariamente tenga esa condición desde el punto de vista administrativo, sino que va más allá. "Sería cualquier persona que participe en el ejercicio de funciones públicas y que sea designado públicamente".

El fiscal del Supremo argumentó que no es justo que se considere al médico de la sanidad pública como funcionario cuando se le esté enjuiciando por un delito y no cuando recibe una agresión.

"Algunos médicos han sido condenados por determinadas conductas que son propias de los funcionarios. Por ejemplo, al facultativo que trabaja en la sanidad pública se le puede sancionar si falsifica un certificado o por malversación de fondos. Por lo que si a un mismo médico se le puede acusar de un delito y aplicar los tipos penales propios de los funcionarios, que tienen un plus de agravación, necesariamente les tiene que ser aplicable esta circunstancia cuando son víctimas de un delito". El jurista señaló que este argumento está fundamentado en varias sentencias.

Valor probatorio

El fiscal del Supremo explicó, no obstante, que la consideración del médico como autoridad no implica que en un juicio su versión de los hechos goce de mayor valor que la de la otra parte.

Por otro lado, López Sanz se refirió a las quejas de los médicos de la sanidad privada, que piden que también ellos puedan verse beneficiados de la consideración de autoridad al configurar la responsabilidad del agresor.

El jurista citó el artículo 24 del Código Penal, que establece que se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas. "La distinción entre médico público y privado es imposible de salvar; para igualar la condición de los dos profesionales habría que crear otro tipo penal".

Diario Médico